

BOLETÍN JURÍDICO

Número 47- Linares, diciembre de 2024

LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

La ley 21.713 entrega nuevas herramientas al Servicio de Impuestos Internos para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado, las que utilizará de manera responsable pero decidida, para impedir el accionar de quienes buscan perjudicar al país.

1. Trazabilidad en Bienes

Las normas actuales sobre trazabilidad de bienes contenidas en el artículo 60 quinquies del Código Tributario se extiende respecto de cualquier impuesto y no solo para "bienes afectos a impuestos específicos".

2. Tasación y reorganizaciones empresariales

Se actualizan sustancialmente las normas sobre tasación contenidas en el artículo 64 del Código Tributario, permitiendo tasar en general cuando los valores difieren notoriamente de los normales de mercado. Se define valor normal de mercado, se permite acreditar esos valores con informes de valoración y se establecen normas precisas sobre el ejercicio de la facultad de tasar en el caso de reorganizaciones empresariales nacionales como internacionales.

3. Obligación de las plataformas de intermediación y de otros actores de exigir inicio de actividades

Se modifican las normas del artículo 68 del Código Tributario, sobre inicio de actividades, estableciendo la obligación que ciertas entidades

exijan respecto de las personas o contribuyentes acreditar haber efectuado ante el Servicio el trámite de inicio de actividades, cuando corresponde. Las entidades obligadas a exigir inicio de actividades son:

a) Todos los órganos de la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades respecto de las personas que requieran una autorización para desarrollar una actividad económica o que dicha autorización sea parte de los requisitos a cumplir para ser autorizado a desarrollar una actividad económica habitual.

b) Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, respecto de quienes contraten sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica.

c) Los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, respecto de las entidades que ofrezcan sus productos.

4. Entrega de información sobre cantidad de abonos por parte de entidades financieras

Se introduce un artículo 85 ter del Código Tributario, que obliga a las entidades financieras a proporcionar al Servicio información de la cantidad de abonos que reciban titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o

establecido en el país, cumpliendo ciertos requisitos.

Se debe entregar al Servicio la información que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo su rol único tributario, la identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se han producido por parte de personas o entidades diferentes en los periodos respectivos y si la cantidad de abonos ha superado en más de un período.

Esto es: 1. Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes. Cuando una persona o entidad sea titular de más de una cuenta bancaria en una misma entidad financiera, la verificación de la cantidad de operaciones señalada en el párrafo anterior deberá realizarse de forma acumulada entre todas las cuentas de las que fuere titular. 2. Que se trate de titulares que no se encuentren dentro de aquellos cuya información deba ser reportada por aplicación de las disposiciones de la letra c) del artículo 85 bis.

Asimismo, la información deberá contener el monto agregado de los abonos, pero no incluirá la información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

5. Obligación de los bancos comerciales de exigir inicio de actividades a la respectiva persona jurídica o entidad empresarial que solicite un crédito

El propósito es que las operaciones realizadas con bancos comerciales, y en que el solicitante sea una persona jurídica u otro tipo de entidad empresarial, el banco deba exigir el inicio de actividades de la respectiva persona jurídica o entidad empresarial.

Los bancos comerciales deberán informar al Servicio sobre las solicitudes aprobadas, en caso de que éste lo requiera, para el cumplimiento de sus funciones.

6. Cambios a delitos tributarios

Se actualizan y precisan algunos tipos penales (como los vinculados a la confección, venta o facilitación de documentos tributarios) así como la gradación de las diversas penas asociadas a los distintos tipos penales y la mejora de la "clausura".

7. IVA a compra de bienes a no residentes

Se amplía el IVA a las ventas de bienes situados en el extranjero que tengan como destino el territorio nacional. Esta medida, recomendadas internacionalmente, aumentan la eficiencia de los procesos de cobro de IVA en los envíos de bajo valor, mejorando la recaudación, neutralidad, competencia en un plano de igualdad entre empresas nacionales y extranjeras, y combate a la informalidad, entre otros.

De este modo, se grava con IVA la venta de los bienes situados en el exterior (cuando se destinan a Chile), impuesto que deberá ser pagado a través del sistema simplificado de tributación del párrafo 7 bis de la LIVA por el vendedor o por la plataforma digital de intermediación.

Esto implica además la exención del IVA en la importación de dichos paquetes y una eliminación del "de minimis".

Asimismo, se exime del pago del arancel aduanero a la importación de bienes cuyo IVA se haya pagado en la venta, en virtud del nuevo inciso final del artículo 4° de la LIVA.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Posdata: LEY COMPLEMENTARIA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

La ley 21.716 asegura la ejecución de ciertas disposiciones contenidas en la Ley 21.713 de Cumplimiento Tributario y extiende los plazos para que los contribuyentes gestionen solicitudes de reconocimiento de activos en el extranjero, finalización de juicios tributarios y suscripción de convenios de pago.

Para tal efecto, modifica el literal a) del numeral 3 del artículo 1 que a su vez modifica el artículo 4 ter del Código Tributario, eliminando la ambigüedad de la frase “total o parcialmente” y esclareciendo efectivamente cuándo hay abuso de las formas jurídicas.

Del mismo modo, modifica las fechas señaladas en los artículos transitorios, indicando que el sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentran en el extranjero, comenzará desde el primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

En el mismo sentido, entre el primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley y el 30 de diciembre de 2024, los contribuyentes que mantengan gestiones judiciales pendientes ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, ya sea por reclamos de giros o liquidaciones de tributos, podrán poner

término por única vez a dichas gestiones, siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero del presente año. A su vez, amplía el plazo respecto a las facilidades para el pago de cuotas periódicas, mensuales y sucesivas de aquellos impuestos adeudados o multas por incumplimiento administrativos, desde la fecha de la publicación de la ley, hasta noventa días posteriores de la publicación de la modificación de la presente ley N° 21.713, en relación al concepto de abuso en materia tributaria y a la vigencia de algunas de sus disposiciones.

También establece una disposición especial para la entrada en vigencia del artículo 16 de la Ley N° 21.713, el cual regula el arancel aduanero que se aplicará a las importaciones de hasta 500 dólares en envíos postales, encomiendas, entregas rápidas, entre otros. El objetivo es que este artículo entre en vigor de manera sincronizada con las modificaciones al IVA introducidas por la Ley 21.713, permitiendo una aplicación simultánea de ambos cambios. Todo lo anterior tiene como propósito precisar la vigencia de las disposiciones de la Ley N° 21.713, aclarar los plazos y reforzar aspectos relacionados con el cumplimiento de la obligación tributaria frente a posibles abusos en materia tributaria.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional

LEY DE AGILIZACIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

La ley 21.718 sobre Agilización de Permisos de Construcción define cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de permisos de construcción.

Establece la responsabilidad del Director de Obras Municipales (DOM) en el contexto del otorgamiento de un permiso de construcción

correspondiéndole únicamente la revisión de las normas urbanísticas y que contenga los antecedentes acompañados a la solicitud de permiso. El cumplimiento de las demás normas será de responsabilidad del propietario, arquitecto y demás profesionales intervinientes.

Incorpora nuevos preceptos que mandatan la dictación por parte de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (MINVU) de fichas de revisión y verificación de solicitudes, formularios de actas de observaciones e informes tipo de revisores independientes, para uniformar la tramitación de solicitudes ante la DOM.

Se exime de permiso o autorización a determinadas obras preliminares (instalación de faenas, preparación de canchas o instalaciones para confección de hormigón, instalación de grúa, ejecución de excavaciones, entre otras) reemplazándola por declaraciones juradas, una vez presentada la solicitud de permiso de edificación.

Faculta a la Ordenanza General para determinar aquellos casos que, en consideración a su carga

de ocupación, uso, clase y destino, se habilite la ejecución de las obras mediante el archivo de una declaración jurada donde el propietario y el arquitecto certifiquen que el proyecto cumple con las normas urbanísticas y todas las normas que sean aplicables al proyecto.

Propone un recurso de reclamación en materia urbanística para impugnar resoluciones de las DOM por cualquier interesado, que contempla una primera etapa en sede administrativa, que corresponderá a las SEREMI MINVU, y una segunda etapa en sede judicial. Con este mecanismo de impugnación se apunta a unificar jurisprudencia sobre la materia y disminuir la dispersión de medios de impugnación respecto de permisos de construcción, otorgando mayor certeza jurídica a todas las partes.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ley de Funerales de Alto Riesgo

La ley 21.717 tiene por objeto regular la realización de funerales en los que existan circunstancias que representen fundadamente un riesgo para la seguridad y el orden público, estableciendo un procedimiento, las medidas de control y las sanciones para los delitos cometidos con ocasión de ellos, disponiendo asimismo, la modificación de otros cuerpos legales.

Entre los aspectos principales de la ley, se destacan los siguientes:

Establece que la autoridad encargada de efectuar la calificación de funeral de riesgo es la Delegación Presidencial Regional, mediante resolución fundada, y de conformidad al reglamento de la propia ley. En dicha resolución, deberá considerar un informe técnico que deberá elaborar Carabineros de Chile, en el que se deberá consignar los antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias del deceso y los demás criterios que defina el reglamento de la ley. Para efectuar esta calificación, dicha autoridad

deberá requerir información a Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

Por su parte, la ley dispone que la resolución de la Delegación Presidencial que corresponda se deberá notificar personalmente a los familiares directos del fallecido inmediatamente después de su dictación, bajo el orden de prelación y cumpliendo los demás requisitos señalados en la ley.

En cuanto a la sepultación o cremación de la persona fallecida, esta se debe realizar en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación de la resolución, lo que comprende la inscripción de la defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación y el traslado del fallecido directamente hasta el lugar donde se realizará el funeral. Además, se contemplan una serie de medidas de carácter administrativa tendientes a agilizar y garantizar que el proceso funerario se lleve a efecto en este plazo.

En materia reglamentaria, se estatuye que el Ministerio encargado de la seguridad pública será organismo encargado de dictar un reglamento, el que

deberá contemplar la metodología y los antecedentes necesarios para la calificación de un funeral de riesgo, debiendo contener, a lo menos: 1) Los criterios de calificación (por ejemplo, antecedentes delictuales del fallecido, vinculación con el crimen organizado o el narcotráfico, entre otros); 2) Los canales de información entre el Delegado/a Presidencial y Policía de Investigaciones y Gendarmería, y los demás órganos de la Administración del Estado; 3) Canales de comunicación públicos para recibir denuncias sobre la ocurrencia de estos funerales.

Este reglamento se deberá dictar dentro de los seis meses contados desde la publicación de esta ley.

En otro orden de ideas, la ley establece que si con ocasión de un funeral de riesgo se comete alguno de los ilícitos indicados en su artículo 14, ya sea dentro del recinto de la sepultación o cremación, durante la ceremonia, en las inmediaciones o durante el traslado del cortejo fúnebre, serán sancionados de acuerdo al delito que se trate, pero con las penas agravadas.

Asimismo, se establece la facultad de Carabineros de Chile para determinar el trayecto por el cual será

trasladado el cuerpo al lugar de sepultación o cremación, de garantizar la seguridad durante el proceso funerario y de controlar la identidad de los participantes. También podrá impedir el ingreso de elementos que por su naturaleza, dimensiones o características puedan causar daños o alterar el orden, como también, rechazar la entrada de personas bajo la influencia de alcohol o drogas, aplicando pruebas de detección cuando sea necesario. La administración del cementerio podrá solicitar su apoyo en estas tareas. Los procedimientos y directrices se detallarán en el reglamento correspondiente.

Para cumplir con sus objetivos, la ley ordena la modificación del artículo 46 de la ley N°4.808, sobre Registro Civil y del artículo 320 del Código Penal.

Finalmente, en cuanto a la entrada en vigencia de la ley, el artículo segundo transitorio de la ley, dispone que entrará en vigor transcurridos 60 días contados desde la publicación del reglamento a que hace mención esta normativa.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional

Ley de Deberes Informativos de los Proveedores de Telecomunicación

La ley 21.708 introduce cambios a la Ley del Consumidor, estableciendo nuevos deberes para los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Entre las principales modificaciones, se amplía el alcance del artículo 30, incorporando explícitamente las “aplicaciones” dentro de las disposiciones aplicables a los servicios de Internet.

Además, se impone la obligación a los proveedores de informar, a su costo, sobre la existencia de planes que representen una opción objetivamente más conveniente para el usuario. Esto incluye, por ejemplo, servicios similares a menor precio o con mayores beneficios al mismo costo. Dicha información deberá ser comunicada en la boleta una vez que el plan esté en servicio y, adicionalmente, al titular del contrato por correo electrónico, siempre que este haya dado su consentimiento.

Los proveedores también deberán mantener actualizada, en sus páginas web y aplicaciones, la información relativa a planes y precios, asegurando que los usuarios puedan ejercer su derecho a cambiar de plan sin enfrentar multas ni recargos.

Estas disposiciones buscan promover una mayor transparencia, accesibilidad y protección para los consumidores en sus interacciones con las empresas de telecomunicaciones, fortaleciendo sus derechos en un mercado altamente dinámico y competitivo. *Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional*

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA

Corte Suprema, rol 26.455-2023

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, ACOGIDO – SENTENCIA YERRA EN CUANTO A ACOGER LA DEMANDA, PUESTO QUE NO CONSIDERÓ LA IMPRUDENCIA DE UN TERCER CONDUCTOR – CONCESIONARIA NO PUEDE ESTAR OBLIGADA A VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES SI ÉSTOS NO ACTÚAN DE MANERA ACORDE A LA NORMA VIAL – IR EN CONTRA DEL TRÁNSITO SUPONE UNA CONDUCTA TEMERARIA, IRRACIONAL Y SORPRESIVA QUE ADEMÁS ERA IMPOSIBLE DE PREVER E INCLUSO DE EVITAR.

Tratándose de este recurso de nulidad, se debe considerar que es un hecho establecido en la causa que el vehículo ingresó a la vía afecta a la concesión, razón por la cual es la concesionaria quien se encuentra obligada de velar por la seguridad de los usuarios. Siendo las cosas de este modo, la pregunta que envuelve la causalidad por omisión es la siguiente: ¿puede afirmarse que la concesionaria incurrió en una omisión imputable causante de los daños que se reclaman? Y, en segundo lugar, ¿puede afirmarse que de haber actuado la concesionaria se habría evitado el daño? Como se puede apreciar, la pregunta se refiere tanto a la culpa como a la causalidad por omisión.

Al revisar las circunstancias en las que sucede el accidente, estas son, que el conductor, a pesar de estar claramente señalizado el sentido de la ruta, ingresa temeraria y sorpresivamente a la vía en sentido contrario, surge una segunda pregunta: ¿Cuál es la medida o las medidas que le eran exigibles a la concesionaria para evitar el accidente?

Ante todo, se debe tener presente que en la sentencia queda asentado que la concesionaria había cumplido con su deber de seguridad, pues la vía de acceso estaba suficientemente señalizada y daba cuenta inequívocamente de que aquella ruta de ingreso permitía de manera exclusiva la entrada a la vía con dirección hacia el poniente. Es más, el tribunal determinó de manera clara y precisa que el conductor del vehículo pasó por sobre la solera, el área demarcada y las tachas que existían en el lugar, en circunstancias que la finalidad de dichos elementos es señalizar de manera adecuada la zona

de ingreso e indicar el correcto sentido del tránsito de la autopista y, de este modo, impedir conductas temerarias, negligentes e ilegales, como la ejecutada por el señor Combes.

Se trata de un hecho –la actuación del señor Combes– respecto del cual para una persona razonable, en el mismo lugar y circunstancias de la concesionaria, le era absolutamente imprevisible: un hecho ilegal, temerario, irracional y sorpresivo. De esta forma, ni a una persona razonable en el lugar de la demandada, ni a esta le resultaba exigible adoptar medidas distintas a las existentes –la señalética correcta y los elementos requeridos para indicar el sentido de la vía– y, por lo mismo, no es normativamente procedente imputarle a la concesionaria una omisión como causa del suceso fatal.

La concesionaria no tenía cómo prever que luego de permanecer el vehículo detenido en un lugar aledaño a la calzada, su chofer iniciaría la marcha y posteriormente ingresaría a una vía de alta velocidad contra el tránsito.

Además, cualquier medida distinta a las adoptadas por la concesionaria dentro del terreno concesionado hubiera resultado inútil para impedir el daño, puesto que la actuación del conductor infractor no solo era imposible de prever, sino que también de evitar. Entonces, dando respuesta a la segunda pregunta formulada, cabe señalar que el daño igualmente se habría producido cualquiera haya sido la medida adoptada por la demandada. De haber actuado, no habría evitado el accidente.

Lo cierto es que el hecho generador del daño fue la actuación ilegal, temeraria y culpable es el señor Combes. La muerte del señor Agustín Cerda Escobar es consecuencia directa e inmediata de la actuación del señor Combes.

A partir de las consideraciones precedentes, esta Corte concluye que el tribunal de alzada incurre en un error de derecho al condenar a la concesionaria al pago de una indemnización como autora –por

omisión– de los daños que padecieron los actores. No se cumplen con los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. Por un lado, no hay culpa de la concesionaria; y, por otro, no concurre el requisito de la causalidad por tratarse de un hecho –el ingreso a la ruta en sentido contrario– imprevisible e imposible de evitar por parte de la demandada.

El único responsable, aunque no sea objeto de la controversia, es el señor Combes –una persona con discernimiento– quien ingresa en sentido contrario con su vehículo a una ruta de alta velocidad, contraviniendo la señalización y las normas de la Ley del Tránsito (consid. 14).

Fuente: Poder Judicial

Corte Suprema, rol 250.690-2023

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA LABORAL, ACOGIDO – REVOCA RECURSO DE NULIDAD Y CONFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA EMPRESA PRINCIPAL RESPECTO DE TRABAJADORES SUBCONTRATISTAS DURANTE EL TIEMPO EN QUE HUBO SUBCONTRATACIÓN – POR TANTO, INDEMNIZACIONES POR NULIDAD DEL DESPIDO PUEDEN SER COBRADAS A EMPRESA PRINCIPAL SI HECHOS OCURRIERON DURANTE ESE TIEMPO AUNQUE LA DEMANDA SEA POSTERIOR – PROPÓSITO DE LA SOLIDARIDAD ES GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR SUBCONTRATADO Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES – LEY BUSTOS.

El artículo 183-B del Código del Trabajo hace solidariamente responsable a la empresa principal y contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a sus contratistas y subcontratistas, en su caso, en favor de sus dependientes, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda pagar al término de la vinculación; responsabilidad circunscrita al periodo durante el cual prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal, debiendo esta asumirla si no es posible hacer efectiva la del empleador directo (consid. 7º).

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del citado código, el despido de un trabajador no surte efecto si el empleador no está al día en el entero de sus

cotizaciones previsionales, sancionándolo con el pago de las remuneraciones y demás prestaciones a contar de tal fecha y la de su convalidación, conclusión que queda comprendida en los términos empleados en su artículo 183-B, en particular, en la expresión ‘obligaciones laborales y previsionales’, de las que deberá responder la empresa principal, según se señaló; razón por la que corresponde imputarle las consecuencias de tal ineficacia por la deuda previsional existente y, en su caso, al contratista, siempre que los presupuestos fácticos de dicha institución se configuren durante la vigencia del contrato o subcontrato (cons. 8º).

No obsta a la conclusión anterior, la circunstancia que la responsabilidad solidaria de la empresa principal esté limitada al tiempo o período durante el cual los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación, porque el hecho generador de la sanción que establece el citado artículo 162, se presenta durante la vigencia de dicho régimen; en otras palabras, la causa que provoca su aplicación –no pago de las cotizaciones previsionales– tiene su origen en el ámbito que aquella controlaba y en el que la ley le asignó responsabilidad debido a la utilidad que obtiene del trabajo prestado por los dependientes de un tercero, y por la necesidad de cautelar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, deber que en este caso no fue observado por la demandada solidaria (c. 9º).

La referida conclusión está acorde con los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la medida que establece un sistema de protección a los trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones, ya que, como se indicó, instituyó respecto de la empresa principal una responsabilidad solidaria y subsidiaria en lo concerniente a las obligaciones laborales y previsionales que debe asumir el contratista respecto de su dependiente, para, en definitiva, estimular y velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de tales prestaciones (c. 10).

Por último, se debe tener presente que la nueva normativa que regula el trabajo en régimen de

subcontratación no excluye a la empresa principal de la aplicación de la ineficacia del despido de que trata el artículo 162 del Código del Trabajo, y tampoco fue materia de discusión o indicación durante la tramitación de la Ley N°20.123, lo que se puede apreciar del examen de la discusión parlamentaria (c. 11).

A mayor abundamiento, se debe tener en consideración que la materia de derecho propuesta se encuentra unificada desde hace algún tiempo por esta Corte, tras la dictación del fallo pronunciado en los autos Rol N°1.618-2014 y, más recientemente, en

los ingresos N° 94.442-2021, 14.044-2022, 40.407-2022, 80.866-2022 y 11.405-2022, este de 21 de noviembre de 2023 (c. 12).

En ese contexto, solo cabe concluir que al acoger la Corte de Apelaciones de Temuco el recurso de nulidad interpuesto por el Fisco de Chile-Ministerio de Obras Públicas en contra de la sentencia del grado, hizo una incorrecta aplicación de la normativa concerniente al caso, razón suficiente para dar lugar al arbitrio intentado (c. 13).

Fuente: Poder Judicial

Dictámenes de la Contraloría General de la República

- **E547949 - Docentes - Fuero gremial** - Es improcedente la decisión de renovar con una carga horaria menor a la designación de un docente contratado que goce de fuero gremial.
- **E547986 - Finanzas públicas - Becas** - La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo deberá admitir las solicitudes de las becarias al beneficio de extensión COVID-19, sin considerar la extensión por maternidad.
- **E553338 - Finanzas y presupuesto - Transferencia de recursos** - La normativa sobre transferencias contenida en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024, resulta aplicable a los trasposos de recursos que el Gobierno Regional de Antofagasta efectúe a la Universidad Católica del Norte.
- **E552275 - Municipal - Concejos municipales** - En el sorteo a que se refiere el artículo 107 de la ley N° 18.695, deben participar todos los concejales actualmente en ejercicio, ya sea que se encuentren repostulando al cargo de concejal, o postulando a la plaza de alcalde.
- **E552590 - Organización y atribuciones - Atribuciones del Instituto de Salud Pública** - Instituto de Salud Pública de Chile se encuentra facultado para cobrar derechos por las prestaciones que se indican. Remite copia de informe emitido por esa entidad.
- **E556034 - Seguridad social - Bono compensatorio de sala cuna** - Procede que el monto del bono compensatorio de sala cuna, correspondiente al período en que se hace uso de permiso postnatal parental en modalidad de media jornada, sea proporcional a esta.
- **E556052 - Seguridad social - Pensiones** - Superintendencia de Pensiones actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al disponer la extinción de la garantía estatal por pensión mínima de invalidez que indica.
- **E550340 - Teletrabajo - Organización y atribuciones** - La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores debe modificar los contratos de trabajo del personal con el que acordó modalidades de trabajo remoto diversas de aquellas autorizados por ley para el sector público.
- **E552568 - Urbanismo - Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones** - Permisos de edificación aprobados bajo el sistema de agrupamiento continuo en la comuna de Estación Central que no fueron invalidados pueden ser modificados por sus titulares, solo en los términos que se anotan.



Este Boletín tiene una

Licencia Creative Commons BY 4.0:

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

REDES SOCIALES Y CONTACTO

sergioarenasb

sergioarenasabogado

sergioarenas.abogado

995459643